

LA AGENDA POLÍTICA DEL ‘AGROEXTRACTIVISMO VERDE’ EN AMÉRICA LATINA

The political agenda of ‘green agroextractivism’ in Latin America

Ahead of Print

ISSN: 0718-090X

Revista de Ciencia Política
cienciapolitica.uc.cl

ALBERTO ALONSO-FRADEJAS 

Universidad de Wageningen, Países Bajos.

ARTURO EZQUERRO-CAÑETE 

Universidad de New Brunswick, Canadá.

BEN M. MCKAY 

Universidad de Calgary, Canadá.

RESUMEN

¿Cuál es la agenda política que anima, justifica y legitima el extractivismo de recursos en el marco de las transformaciones hacia la creciente sustentabilidad y la acción climática? Esta es una cuestión de creciente relevancia a nivel mundial y multifactorial a la que buscamos ofrecer respuestas desde el campo latinoamericano. Para ello comenzamos con un debate sobre la economía y la ecología política del extractivismo agrario contemporáneo. Después examinamos el papel de diversos actores estatales y sociales tras el auge del agroextractivismo en la acción climática en Bolivia, Guatemala y Paraguay. En Bolivia, las alianzas de Evo Morales con diversas clases de capital y su dependencia de la economía extractiva acabaron provocando su caída al perder el apoyo de sus bases y no estar dispuesto a renunciar al poder del Estado. El auge reciente de los complejos de cultivos comodín de la caña de azúcar y la palma aceitera en Guatemala se asienta sobre la nueva agenda del ‘populismo corporativo autoritario.’ Esta conlleva concesiones políticas a las personas más desfavorecidas a través de transferencias públicas y de sistemas de gobernanza multiparte, como en el caso de los regímenes políticos populistas convencionales. Pero además el populismo corporativo autoritario implica concesiones a las clases trabajadoras y al medio ambiente en el ámbito productivo privado. La violencia, sin embargo, sigue siendo clave en esta agenda política del poder, aun si ahora se legitima bajo la defensa del Estado de Derecho. En Paraguay, el feroz rechazo a los intentos de Fernando Lugo para regular el agronegocio culminó en un ‘golpe parlamentario’ orquestado por la clase terrateniente y precedido por violencia extrema contra el campesinado. El golpe facilitó la expansión de un modelo agroextractivo caracterizado por la adopción de nuevas variedades de soja genéticamente modificadas, la violencia estatal y el despojo y marginación de la población campesina e indígena. Tras este análisis por países planteamos una discusión más general sobre cómo las alianzas entre actores estatales, elites y capital



agroextractivo, incluyendo a través de iniciativas de gobernanza multiparte, han debilitado el potencial transformador de gobiernos progresistas para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores. Con este fin, la triple alianza no sólo recurre a las tradicionales estrategias de influencia sobre marcos normativos y discursos legitimadores, sino también a nuevas estrategias políticas que combinan la generación de consentimiento popular al orden agroextractivista con la violencia y represión selectiva amparada en la defensa del Estado de Derecho. Concluimos subrayando cómo el giro ecomodernista 'verde' en la agenda política del agroextractivismo desplaza la atención de la paradoja del creciente uso de recursos naturales para enfriar el planeta hacia las innovaciones técnico-administrativas que requieren diversos complejos corporativos de cultivos comodín para reproducir sus condiciones naturales y sociales de producción de bioenergía y biomateriales por 'el bien común.'

Palabras clave: extractivismo agrario; economía verde; élites; relaciones Estado-sociedad; dinámica política del cambio agrario y ambiental.

ABSTRACT

What is the political agenda that animates, justifies, and legitimizes resource extractivism in the context of sustainability transformations and climate action enhanced? This is a question of growing relevance across geographies and sectors of activity that we aim to address from the Latin American countryside. To this end, we start with a discussion on the political economy and ecology of contemporary agrarian extractivism. Then, we turn to examine the role of diverse state and social actors in the rise of agroextractivism for climate stewardship in Bolivia, Guatemala, and Paraguay. In Bolivia, the alliance of Evo Morales with diverse classes of capital and reliance on the extractive economy ultimately led to his downfall as he lost support from his social bases and was unwilling to give up state power. The rise of the flex sugarcane and oil palm complexes in Guatemala since the mid-2000s relies on the new political agenda of 'authoritarian corporate populism'. This involves political concessions to the underprivileged through public grants and multistakeholder governance, as in conventional populist political regimes. But additionally, authoritarian corporate populism involves concessions to working people and the environment in the private production realm. Violence, however, remains foundational to this political agenda, even if it is now cloaked in the rule of law. In Paraguay, the fierce rejection of Fernando Lugo's tepid attempts to regulate the agribusiness sector culminated in a "parliamentary coup" orchestrated by the landlord class and preceded by spectacular acts of violence against peasants. The coup paved the way for the continuing expansion of an agroextractive export model characterized by the adoption of new genetically modified soy varieties, recurring state violence, and increasing campesino and indigenous dispossession and marginalization. Following the three country-analysis we discuss how the alliance among state actors, elites and agroextractivist capital, including through multistakeholder initiatives, have limited the transformative potential of progressive governments to improve the living conditions of the working people. In so doing, the triple alliance relies on the traditional strategies of influencing regulatory frameworks and legitimizing discourses. But it also relies on new political strategies that combine the manufacturing of popular consent to the agroextractivist order with violence and selective repression cloaked in the rule of law. We conclude stressing how the 'green' ecomodernist turn of the agroextractivist agenda shifts attention away from the paradox of increasing the use of natural resources to cool down the planet. Rather, it privileges the sort of technical-administrative innovations that various flex crops complexes require to reproduce their necessary natural and social conditions of production of bioenergy and biomaterials for 'the common good.'

Keywords: agrarian extractivism; green economy; elites; state-society relations; politics of agrarian and environmental change.

I. INTRODUCCIÓN

La agricultura capitalista de corte extractivista viene adquiriendo un papel protagonista en la producción de mercancías agrícolas o agro-commodities (i.e., alimentos, biomateriales y bioenergía) en el contexto de las crisis ambientales y sociales de nuestros días. Éste es el modelo que impulsan los complejos corporativos de “cultivos comodín” como la soja, la palma aceitera y la caña de azúcar que lideran el debate actual sobre la “intensificación agrícola sostenible”, la “agricultura climáticamente inteligente” y la producción de “materias primas verdes” (Banco Mundial 2015; PNUD 2016), a pesar de su continua dependencia de los combustibles fósiles y de costosos insumos externos. Aunque abundan las contradicciones, el modelo agroextractivista se ha expandido a nivel global, y en particular en América Latina, a la par de una mayor consolidación corporativa (Gras y Hernández 2014), de la introducción de la agrobiotecnología y las semillas transgénicas (Otero y Lapegna 2016), y de la creciente penetración en el campo del capital financiero y extractivista de minerales e hidrocarburos (Gago y Mezzadra 2015). A su vez, los crecientes flujos comerciales de biomasa agrícola y forestal están agravando los problemas climáticos, medioambientales y de salud humana asociados al extractivismo (Gudynas 2020). Debido a su excesiva dependencia de la biomasa fósil y de los cambios de uso del suelo que conlleva, el sector agrícola y forestal es responsable del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina (CEPAL 2021a). La expansión de plantaciones y pastos ganaderos de gran escala está impulsando la deforestación a un ritmo alarmante: entre 1990 y 2020 la pérdida total de la cubierta forestal en toda la región fue de 138 millones de hectáreas, lo que equivale a algo más de la superficie de Perú (CEPAL 2021b).

A pesar de las crecientes contradicciones biofísicas de la agricultura capitalista (Weis 2010) y de la escalada en los conflictos socioambientales ligados a la apropiación y el despojo de tierras, territorios y recursos naturales (Svampa 2019), el modelo agroextractivista sigue avanzando y promoviéndose bajo la fachada de la acción climática y el bienestar social. El Banco Mundial insiste en la necesidad de transitar hacia una agricultura capitalista más sostenible e inclusiva mediante técnicas y tecnologías “climáticamente inteligentes” (Banco Mundial 2015) y un modelo productivo que incorpore a las y los agricultores familiares y capitalistas de pequeña escala en cadenas globales de mercancías para reducir la pobreza rural (Banco Mundial 2007). El “Programa de Commodities Verdes” del PNUD, lanzado en 2009, promueve las asociaciones público-privadas y los compromisos voluntarios del sector privado en el contexto de iniciativas globales de múltiples partes interesadas (‘multistakeholder’) enfocadas en la gobernanza de cadenas de mercancías agrícolas de alto valor como las de la soja, el aceite de palma y la piña a fin de conciliar la acción climática con la intensificación agrícola (PNUD 2016, 2021).

La naturaleza apolítica de estas soluciones legitima la rearticulación de los supuestos Neo-Maltusianos bajo el discurso del cambio climático (Ojeda, Sasser

y Lunstrum 2020) y fracasa en abordar las causas estructurales profundamente arraigadas de las desigualdades rurales (Guereña 2016), mientras desvía la atención de las problemáticas de los derechos humanos y la representación democrática de una gran diversidad de trabajadoras/es rurales (UNDROP 2018).

Es en este contexto, y desde perspectivas críticas de la economía, la ecología y la sociología política, que analizamos aquí las dinámicas y actores políticos que animan, justifican, legitiman y en última instancia posibilitan una agricultura de corte extractivista en Latinoamérica.¹ De este modo es que desafiamos la producción discursiva y la legitimidad de los modelos dominantes de ‘agroextractivismo verde’ en Bolivia, Guatemala y Paraguay. Estos tres países dan muestra de importantes economías agrarias caracterizadas por la gran expansión de los complejos corporativos de cultivos comodín en los últimos años (McKay, Alonso-Fradejas y Ezquerro-Cañete 2022). A su vez, los tres países adolecen de tasas persistentemente altas de pobreza rural e inseguridad alimentaria, así como de los niveles más altos de desigualdad en la distribución de la tierra en la región y en el mundo.² Por último, los tres países incluyen una muestra interesante de distintos regímenes políticos durante las dos últimas décadas en Centroamérica, la región andina y el cono sur que van desde la izquierda progresista en Bolivia bajo los 13 años del gobierno de Evo Morales (2006-2019) hasta la derecha conservadora en Guatemala, pasando por el caso híbrido de Paraguay donde la breve experiencia social-demócrata bajo Fernando Lugo (2008-2012) terminó con un golpe parlamentario y el regreso del hegemónico Partido Colorado.

El artículo está organizado de la siguiente manera: tras esta introducción presentamos las líneas generales del modelo de ‘agroextractivismo verde’ en Bolivia, Guatemala y Paraguay a través de un marco analítico que hace hincapié en siete características extractivistas clave del modelo de agricultura capitalista dominante. Después planteamos una discusión sobre cómo las alianzas entre actores estatales, elites y capital agroextractivo vienen debilitando el potencial transformador de gobiernos progresistas para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores/as. Con este fin, la triple alianza no sólo recurre a las tradicionales estrategias de influencia sobre marcos normativos y discursos legitimadores, sino también a nuevas estrategias políticas que combinan la generación de consentimiento popular al orden agroextractivista con la violencia y la represión selectiva amparada en la defensa del Estado de Derecho. Concluimos subrayando cómo el giro ecomodernista verde en la agenda del agroextractivismo desplaza el foco de atención de la paradoja del creciente uso de recursos naturales para enfriar el planeta hacia las innovaciones técnico-admi-

¹ Nuestro enfoque es en la agenda política de los grupos de poder tras el modelo agroextractivista. Para una revisión de las dinámicas de resistencia a este modelo ver entre otras/os Bran-Guzmán (2017), Sauer y Oliveira (2022), Veltmeyer y Ezquerro-Cañete (2023a) y León Araya (2023).

² En 2018 la pobreza rural superaba el 50% en los tres países (FAO 2018). El coeficiente de Gini para la distribución de la tierra era de 0,93 en Paraguay (2008), 0,84 en Guatemala (2003), 0,77 en Bolivia (1984) (Guereña 2016).

nistrativas que precisan diversos complejos corporativos de cultivos comodín para reproducir sus necesarias condiciones naturales y sociales de producción de bioenergía y biomateriales por ‘el bien común.’

II. EXTRACTIVISMO AGRARIO EN BOLIVIA, PARAGUAY Y GUATEMALA

La noción de “extractivismo agrario” o “agroextractivismo” tiene una historia reciente.³ Surgió como una categoría analítica desarrollada para investigar los intentos de articular una nueva economía, ecología y sociología política del cambio agrario y ambiental en América Latina a principios de siglo (véase, por ejemplo, Alonso-Fradejas, Alonzo y Dürr 2008; Teubal 2009; Gudynas 2010). Posteriormente, el término se viene utilizando como base para actualizar el significado contemporáneo de la cuestión agraria (Petras y Veltmeyer 2014), como herramienta conceptual para analizar las implicaciones del auge de los complejos de “cultivos comodín” (Ezquerro-Cañete 2016; McKay 2017; Alonso-Fradejas 2018), los efectos de la violencia y la extracción de recursos naturales desde la perspectiva de género (Leguizamón 2019; Berman-Arévalo y Ojeda 2020), y los contornos cambiantes del poder en el sistema global de agro-commodities (Ye et al. 2020), así como un marco para el análisis de la dinámica extractivista depredadora de la agricultura capitalista contemporánea (McKay, Alonso-Fradejas y Ezquerro-Cañete 2022).

En el primer libro sobre el tema, *Extractivismo Agrario en América Latina* (McKay, Alonso-Fradejas y Ezquerro-Cañete 2022), nos propusimos investigar los rasgos extractivistas de las formas dominantes de producción de agro-commodities y agroenergía en diversos complejos de cultivos, modalidades, espacios, geografías y economías políticas a través del análisis de: (1) las particularidades del sector y de las materias primas analizadas; (2) los flujos de capital; (3) la cuestión del trabajo; (4) las dinámicas de acceso y propiedad sobre los recursos; (5) los flujos de conocimiento; (6) los flujos de energía y materiales de la naturaleza no humana; y de (7) la reestructuración territorial y efectos sobre el modelo de desarrollo. Es en este trabajo que también planteamos

“una sutil pero importante distinción entre un modelo ‘extractivo’ y uno ‘extractivista.’ Aunque todas las formas de producción de bienes implican la extracción de recursos, algunas lo hacen en mayor medida que otras en términos de su escala, ritmo y alcance. Así consideramos útil desde el punto de vista analítico diferenciar entre las formas de producción agrícola (necesariamente) extractivas y las (altamente) extractivistas” (McKay, Alonso-Fradejas y Ezquerro-Cañete 2022: 13-14).

³ Para una discusión del concepto de extractivismo agrario como un tipo de extractivismo de recursos naturales, ver McKay, Alonso-Fradejas y Ezquerro-Cañete (2022), Ezquerro-Cañete y Veltmeyer (2023) y Veltmeyer y Ezquerro-Cañete (2023b).

En Bolivia y Paraguay, por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola en las últimas dos décadas forma parte de un imperativo agroextractivista más amplio que puede verse en toda la región del Cono Sur de Sudamérica: la llamada “República de la Soja” (Rulli 2007). En ambos países, el complejo corporativo de la soja está controlado en gran medida por el capital extranjero, generando poco o ningún valor añadido en los componentes producidos localmente. La fuerza de trabajo se ha convertido en excedentaria para las necesidades de acumulación de capital, dando lugar a dinámicas de exclusión social y a una reconcentración de la propiedad de la tierra en el campo. La dependencia de organismos genéticamente modificados y sus costosos paquetes tecnológicos no sólo descartan las formas indígenas y campesinas de trabajar la tierra, sino que también agotan la naturaleza por medio de la erosión del suelo, la contaminación agroquímica y la deforestación a gran escala. Combinadas, estas dinámicas hacen que el complejo de la soja se asemeje a un enclave extractivo – un “enclave sojero” en el análisis de Fogel y Riquelme (2005) – ya que la plusvalía, las rentas y la energía y materiales de la naturaleza son extraídas y apropiadas de las economías y sociedades locales.

En Guatemala, el auge de los complejos corporativos de la caña de azúcar y la palma aceitera bajo el control de la oligarquía nacional conlleva un extractivismo agrario depredador que impulsa un proceso de “destrucción degenerativa” (Alonso-Fradejas 2022). Esto implica una economía productiva sin pertinencia cultural que destruye empleo y se asienta sobre la apropiación de trabajo no remunerado, la cual no sólo deja atrás a la mayoría de la población trabajadora, sino que además agota especialmente a los cuerpos jóvenes y femeninos. Además, el nuevo modelo productivo erosiona las instituciones que permiten tanto la reproducción de comunidades e identidades más pertinentes desde el punto de vista cultural y ecológico, como un cierto grado de socialización de riqueza a nivel local que beneficia a todas y todos, pero es vital para la población más desfavorecida. Precisamente, es esta población la que también se lleva la peor parte en las relaciones de transferencia de costos ambientales y sociales tras la conformación de paisajes tóxicos por parte de las compañías de caña y palma. Así, el auge de los complejos cañero y palmero aumenta y estanca el ejército de reserva de mano de obra, a la vez que empuja a la población excedentaria relativa a los límites de la subsistencia (Alonso-Fradejas 2022).

A continuación analizamos la dinámica política que permite estas transformaciones agrarias y ambientales en cada país, con énfasis en las relaciones Estado-sociedad. Siguiendo a Poulantzas (1978), abordamos el Estado como un espacio de contienda en el que diversos actores sociales persiguen sus intereses y defienden sus identidades a través de diversas estrategias políticas que despliegan en múltiples niveles geográficos y ámbitos de actuación. Esta aproximación al Estado facilita una comprensión más profunda de las relaciones de poder y el cambiante equilibrio de las fuerzas sociales en el campo (Wolford et al. 2013; Vergara-Camus y Kay 2017; Alonso-Fradejas 2018). Es entonces de cara a analizar el papel de estas dinámicas entre Estado y sociedad en la con-

formación del modelo agroextractivo verde que examínanos a continuación la agenda política de los poderosos actores tras los complejos de cultivos comodín en Bolivia, Paraguay y Guatemala.

III. LA AGENDA POLÍTICA DEL 'AGROEXTRACTIVISMO VERDE'

Bolivia

La dinámica política del agroextractivismo en Bolivia debe entenderse en el contexto del desarrollo y la expansión del complejo sojero. Hasta 2005 no se legalizaron en Bolivia las semillas de soja modificadas genéticamente. La nueva semilla modificada vino acompañada de paquetes tecnológicos y de una forma de producción intensiva en capital, mientras que las y los agricultores se fueron insertando en un sistema agroalimentario corporativizado. La integración de las y los pequeños agricultores en el complejo de la soja ha llevado a una mayor dependencia de insumos externos - pesticidas y fertilizantes derivados del petróleo, semillas transgénicas, maquinaria pesada-, así como a un control cada vez más monopolizado del almacenamiento (silos), procesamiento y acceso a mercados internacionales clave para este monocultivo de exportación.

Esta transición agraria coincidió con el triunfo electoral de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) que llegaron al poder con el apoyo abrumador de las poblaciones históricamente marginadas del país y de muchos de los movimientos sociales más influyentes que representan a los pueblos indígenas, las y los campesinos, las mujeres y las clases trabajadoras rurales y urbanas (véase McKay 2018a). Morales prometió una "revolución agraria" que transformaría la estructura desigual de la propiedad de la tierra e incorporaría aspectos como la soberanía alimentaria, los derechos de la Madre Naturaleza y el buen vivir en el "Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo." Estas reformas requerirían el desmantelamiento del poder económico y sobre la tierra de las élites del departamento de Santa Cruz, conocidos como los "Barones del Oriente" (Soruco, Plata y Medeiros 2008), ya que la estructura agraria de Bolivia seguía siendo muy desigual y basada en el minifundio y la agricultura de subsistencia en el altiplano occidental y en los monocultivos a gran escala e intensivos en capital en las tierras bajas del oriente (Kay y Urioste 2007: 69). A pesar de los intentos de reforma agraria en 1953 y 1996, la reforma agraria de Bolivia quedó inconclusa y el ascenso de Evo Morales y el MAS al poder llegó con mucha expectativa y esperanza de un cambio transformador.

Sin embargo, las promesas de una reforma agraria redistributiva no se cumplieron. El MAS entró en una alianza estratégica con el sector del agronegocio, cambiando su discurso de una revolución "agraria" a una revolución "productiva" bajo la necesidad de ampliar la frontera agrícola en nombre de la "seguridad alimentaria" y la "soberanía alimentaria." El complejo de la soja se

convirtió en el centro de una alianza recién establecida entre el Estado y las élites del agrocapital, y su expansión se enmarcó como un medio para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible y como un camino hacia la soberanía alimentaria. En lugar de democratizar y tomar el control de su sistema alimentario, Bolivia se volvió más dependiente que nunca de las importaciones de alimentos durante el primer mandato del MAS, con importaciones de alimentos que ascendieron a 1,100 millones de dólares (Urioste 2011: 31). Si bien se lograron importantes avances en cuanto a la formalización de los títulos de propiedad de los territorios indígenas, nunca hubo un intento serio de reformar realmente la estructura desigual de la propiedad de la tierra (véase Urioste 2012; Colque, Tinta y Sanjinés 2016). Por el contrario, se formó una alianza entre el Estado e importantes grupos de capital que permitió al MAS ganar apoyo político y aliviar las tensiones de oposición por parte de los grupos económicamente poderosos, manteniendo su poder y control político, al tiempo que permitía a las élites agroindustriales y terratenientes aumentar su control sobre la tierra y el complejo de la soja en las tierras bajas del este. Esta alianza dio lugar a muchas fricciones internas en el MAS. Como dijera después de separarse y convertirse en crítico del MAS el exviceministro de Tierras de Bolivia, Alejandro Almaraz (2014: 54), “el proyecto indígena y campesino (...) ha sido derrotado y se han reinstalado los intereses y el poder dominantes del sector empresarial, los oligarcas y los latifundistas.” Es así como las élites agroindustriales y terratenientes aumentan su control sobre la tierra y los complejos agrícolas de Bolivia, extrayendo plusvalía, rentas, energía y materiales, al tiempo que convierten a las y los pequeños campesinos en excedentarios para los requisitos de la acumulación de capital en el agro.

A finales de 2018, representantes del agronegocio y del gobierno lanzaron “la era del biodiésel.” Impulsado por los discursos de la ‘energía verde’ y la sostenibilidad, el programa de biocombustibles busca aumentar la producción de soja y caña de azúcar para biodiésel y etanol, respectivamente. La inversión público-privada comprometió unos 2,000 millones de dólares, estimando que se necesitarían al menos 250,000 hectáreas de nuevas tierras para que este proyecto se ponga en marcha de manera rentable. Los grupos del agronegocio presionaron al gobierno para que legalizara nuevas variedades de cultivos transgénicos y se flexibilizaran las normas y regulaciones sobre deforestación y quema (algo que se concedió en el período 2017-2019 via la Ley 741 y el DS 3973 considerados como las ‘puertas legales’ para el desmonte y la quema de bosques). El plan es que el Estado sea el principal comprador de los biocombustibles para su uso como aditivo y sustituto parcial del combustible importado (McKay y Colque 2021).

La desregulación de la deforestación, combinada con los discursos estatales para ampliar la frontera agrícola para los biocombustibles, proporcionó condiciones favorables para el uso de los incendios ilegales como herramienta para abrir nuevas áreas de cultivo sin consecuencias. La aceptación de los biocombustibles por parte del Estado generó grandes expectativas entre los terrate-

nientes de la región de la Chiquitanía interesados en habilitar más tierras de cultivo. A esto se suma el nuevo acuerdo comercial con China para exportar carne de res, que sin duda incentiva la apertura de nuevas tierras para pastos ganaderos. Las iniciativas de la llamada economía verde siguen dependiendo y fortaleciendo la agricultura de plantación, dirigida por las grandes empresas y dependiente de los insumos externos, con todas sus características extractivistas. Estas son algunas de las contradicciones que en última instancia condujeron a una crisis de legitimidad del gobierno de Evo Morales, ya que las tendencias cada vez más autoritarias de Morales, sus alianzas con las clases del capital y su dependencia de la economía extractiva le llevaron a la derrota al perder el apoyo de sus bases sociales y no estar dispuesto a abandonar el poder. Finalmente, se vio obligado a exiliarse en 2019 (ver McKay y Colque 2021).

Paraguay

La expansión de la frontera agroextractivista en Paraguay se remonta al proyecto de modernización agraria autoritaria de la dictadura de Stroessner (1954-1989). Con la transición a la democracia a principios de la década de los 90, la dinámica del cambio agrario se alejó de la producción de algodón en el minifundio y se orientó hacia el cultivo de soja (no transgénica), lo que limitó tanto el acceso a la tierra como las oportunidades de empleo para el sector campesino (Carter, Barham y Mesbah 1996). La introducción de la soja modificada genéticamente en el campo paraguayo – que entró primero de forma ilegal a través de semillas argentinas que a menudo traían los productores brasileños, antes de ser formalmente legalizada en 2004 – impulsó un boom agroexportador que favoreció directamente a los grandes agricultores que emplean relativamente poca mano de obra por hectárea. En consecuencia, este régimen neoliberal de la soja ha fomentado una trayectoria de crecimiento altamente excluyente que deja fuera a las y los campesinos como productores/as y trabajadores/as (Ezquerro-Cañete 2016; Wesz 2022), mientras que comunidades rurales enteras se convierten cada vez más en islas de pobreza rodeadas de enormes plantaciones de soja (véase, Fogel y Riquelme 2005; Palau et al. 2007; Riquelme y Vera 2013). Más allá de sus impactos socioeconómicos negativos, la consolidación de este modelo agroextractivista ha tenido profundas consecuencias políticas para el Estado paraguayo y las relaciones Estado-sociedad.

La elección en 2008 de Fernando Lugo, un obispo católico influenciado por la teología de la liberación y vinculado a organizaciones campesinas, puso fin a más de seis décadas de hegemonía del Partido Colorado y representó el primer traspaso de poder pacífico entre partidos políticos en la historia de Paraguay. El programa electoral de Lugo se había centrado en reformas socioeconómicas de gran alcance para abordar los problemas de pobreza, desigualdad y corrupción que sufría Paraguay. La reforma agraria redistributiva volvió a la agenda política, una cuestión de especial importancia en un país con “la distribución de la tierra más desigual del mundo, con una pequeña élite latifundista y oligo-

póllica, con importante participación de propietarios extranjeros, que concentra casi toda la superficie agrícola y ganadera, mientras que la inmensa mayoría de familias campesinas e indígenas carecen de tierra suficiente para subsistir” (Guereña y Rojas 2016: 14).

Sin embargo, a pesar de su compromiso explícito con la reforma agraria y la agricultura campesina, el gobierno de Lugo se mostró demasiado débil para llevar a cabo una reforma agraria sustancial y las principales promesas de la campaña quedaron estancadas. Esto se debió, en gran medida, a una alianza anti-reforma entre la poderosa Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP).⁴ La ARP y la APS son miembros de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), una poderosa asociación creada en 2005 para defender los intereses de los productores y exportadores de productos agrícolas. A través de la UGP, los sojeros y ganaderos ‘brasiguayos’ se opusieron a los movimientos que apoyaban un desarrollo más inclusivo, por ejemplo a través de su vehemente oposición a la reforma agraria y la reforma fiscal (Ezquerro-Cañete 2017: 188-189).

Gran parte de las primeras disputas sobre política agraria y gobernanza ambiental del Estado se centraron en el aparentemente oscuro organismo de regulación fitosanitaria, el SENAVE (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas). De la noche a la mañana, el SENAVE pasó de ser un organismo invisible que se ocupaba principalmente de medir la pureza del material vegetal y los agroquímicos, a ser el objetivo de una campaña de propaganda concertada contra la administración de Lugo, orquestada por la UGP. El principal objetivo de la campaña de la UGP fue Miguel Lovera, un ecologista de izquierdas, nombrado director del SENAVE a los dos años de gobierno de Lugo, con el mandato de hacer cumplir las restricciones legislativas sobre la producción de soja (principalmente el uso de pesticidas) (véase Hetherington 2020). Otro punto de controversia se resolvió en torno a la cuestión de la renta extractiva. A diferencia de las políticas neoextractivistas aplicadas en otros países de la región, Paraguay ha mantenido su estrategia de *laissez-faire* en el sector agrícola. Entre 2003 y 2017, las propuestas de reforma fiscal para la introducción de un impuesto a las exportaciones de granos y oleaginosas sin procesar han sido presentadas al menos cinco veces por diferentes bancadas del Congreso, pero han fracasado en todas las ocasiones (Fogel, Costa y Valdez 2018).

El feroz rechazo a los tibios intentos de Lugo de regular el sector agroindustrial culminó en un ‘golpe parlamentario’ orquestado por la clase terrateniente y precedido por espectaculares actos de violencia contra las y los campesinos. El

⁴ El ARP se fundó en 1885. La mayoría de las familias de altos ingresos que residen en Asunción son propietarias de una estancia, por lo que existe una considerable coincidencia entre los ganaderos y otros grupos de interés, incluido el Partido Colorado. Fundada en 1999, la APS se convirtió en el portavoz de los 30,000 agricultores comerciales de mediana y gran escala, a menudo inmigrantes de segunda generación de Brasil de extracción europea (“brasiguayos”), que representan alrededor del 90% de la producción nacional de soja (Ezquerro-Cañete 2017).

15 de junio de 2012, once campesinos sin tierra y seis policías fallecieron en un sangriento incidente en Marina Cue, Departamento de Canindeyú (CODEHU-PY 2012). Inmediatamente después de la “Masacre de Curuguaty,” una mezcla de fuerzas sociales conservadoras vio su oportunidad y convergió en torno a la destitución de Lugo. Las acusaciones de fomentar la invasión de la propiedad privada por parte de las familias campesinas ávidas de tierras, encabezadas por portavoces de alto nivel de los productores de soja (como Héctor Cristaldo, jefe de la UGP, así como portavoces de Cargill y Monsanto), culparon a Lugo de las muertes y pidieron su destitución inmediata (*Ultima Hora* 2012). Dado que la posición de Lugo frente al poder legislativo nunca fue fuerte, no es de extrañar que el Congreso pudiera llevar a cabo un juicio político exprés el 22 de junio de 2012.

Tras el juicio político y la destitución de Lugo, se produjo una rápida aprobación de otras variedades de cultivos transgénicos: ocho nuevas aprobaciones sólo durante los 13 meses de presidencia interina de Federico Franco. Los sucesivos gobiernos colorados de Horacio Cartes (2013-2018) y Mario Abdo Benítez (2018-2023) han devuelto a Paraguay al campo neoliberal ortodoxo de la política del poder latinoamericana y han reforzado los rasgos depredadores y represivos de un modelo agroextractivista exportador caracterizado por la recurrente violencia estatal y la criminalización del movimiento campesino (Ezquerro-Cañete 2019).

Guatemala

Los complejos cañero y palmero en Guatemala están controlados por la tradicional oligarquía blanca ligada al capital financiero internacional. En particular, una nueva generación de ejecutivos/as educadas en universidades “ivy-league” en los EEUU viene proyectando los cultivos comodines de la caña y la palma como un fenómeno capaz de dar respuesta a las crisis sociales y ambientales de nuestros tiempos. Y es con este fin que vienen desarrollando una nueva agenda política que bien puede calificarse como una forma de “populismo corporativo autoritario” (Alonso-Fradejas 2021b).

Las comunidades indígenas y campesinas comienzan a movilizarse contra la expansión de los complejos cañero y palmero en sus territorios desde mediados de los 2000. Este rechazo popular, que coincide con el estallido mediático de la crisis financiera internacional ese mismo año, llama la atención de la prensa nacional e internacional, de investigadores, organizaciones sociales, ONGs y agencias de cooperación al desarrollo. Es así que a partir de 2009 los partidarios de los complejos cañero y palmero reestructuran su agenda política en la dirección del populismo corporativo autoritario, y proyectan estos negocios como medios altamente productivos, respetuosos del medio ambiente y sobre todo capaces alimentar al mundo, producir energía verde y enfriar el planeta mientras fomentan el empleo, el crecimiento económico y la ‘buena gobernanza.’

La nueva agenda del populismo corporativo autoritario en Guatemala implica dos cambios estratégicos. El primero es en el modelo de gestión de los complejos cañero y palmero. De manera gradual, las y los ‘ejecutivos de nueva ola’ transforman su esquema de gobernanza corporativa cerrado al exterior y centrado en accionistas hacia otro más orientado a influenciar el debate público y abierto a ‘múltiples partes interesadas,’ en el que sin embargo los intereses de los dueños siguen ocupando un lugar central. El segundo cambio es el de finiquitar la agenda de ‘fusiles y frijoles’ de los regímenes militares autoritario-paternalistas y sus aliados, incluyendo a la oligarquía. Esta agenda política se utilizó para contrarrestar la amenaza comunista durante la Guerra Fría a través de violencia tanto selectiva como genocida. En cambio, el populismo corporativo autoritario recurre a la persuasión y la violencia selectiva, legitimada bajo la defensa del Estado de Derecho, para contrarrestar a la oposición (Alonso-Fradejas 2021b).

En la práctica, la agenda del populismo corporativo autoritario se basa en cuatro estrategias principales. Aunque todas funcionan de manera sinérgica, las estrategias de “el caballo de Troya”, la “flexibilidad discursiva” y la de “mantenerse a flote” forman parte del pilar populista de esta agenda política, mientras que la estrategia del “lobo con piel de oveja” pertenece a su pilar autoritario y violento (Alonso-Fradejas 2021b).

Tenemos entonces en primer lugar a la “estrategia del caballo de Troya” que busca, por un lado, generar consentimiento y apoyo hacia los complejos cañero y palmero en las comunidades indígenas y campesinas, y por otro cooptar a la oposición organizada. Esta estrategia se despliega a través de la táctica del ‘divide y vencerás.’ Por un lado, una serie de personalidades carismáticas y reconocidas en los ámbitos económico, político o cultural actúan como operadores territoriales de los complejos cañero y palmero para negociar la tierra y el consentimiento de la población. Estos ‘coyotes de las empresas,’ como se les conoce popularmente, pueden ser desde autoridades religiosas hasta maestras/os, líderes comunitarias/os, locutoras/es de radio, trabajadoras/es de ONGs, terratenientes, comerciantes o incluso servidoras/es públicos electos. Por otro lado, las compañías de caña y palma se alían con representantes de ONGs e incluso con algunos líderes sindicales y de organizaciones campesinas e indígenas involucradas en iniciativas de gobernanza multiparte a nivel local y nacional.

En segundo lugar está la estrategia de la ‘flexibilidad discursiva.’ Ésta implica manejar diversas representaciones de la caña y la palma estratégicamente como “cultivos agrícolas,” “plantas” o “mercancías” y justificar así sus beneficios ante diferentes audiencias (Hunsberger y Alonso-Fradejas 2016). Por ejemplo, la caña y la palma se representan como “cultivos” para legitimarlas como ‘campeonas’ de la seguridad alimentaria y el crecimiento económico. Además, esta representación ayuda a contrarrestar las críticas que reciben las plantaciones de caña y palma por sustituir alimentos para producir agrocombustibles.

Alternativamente, la caña y la palma pueden representarse como "plantas," y por tanto las plantaciones como agroecosistemas amigables con la biodiversidad y que además capturan carbono. Y por último la caña y la palma pueden representarse como "mercancías" con usos diversos industriales. Así se eluden las restricciones relativas a alimentos y biodiversidad en negociaciones internacionales sobre comercio, inversión y derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en tratados de libre comercio (Alonso-Fradejas y Gauster 2006).

La tercera estrategia del populismo corporativo autoritario es la de "mantenerse a flote." Esta es una estrategia política clave. Además de aprovechar las concesiones políticas a las personas más desfavorecidas a través de transferencias públicas y de sistemas de gobernanza participativa, tan habituales en el populismo político convencional, el populismo corporativo autoritario incluye concesiones a las clases trabajadoras y al medioambiente en el ámbito productivo privado. Las y los ejecutivos de nueva ola de las empresas cañeras y palmeras vienen introduciendo importantes reformas en materia laboral, de propiedad sobre la tierra y de sostenibilidad medioambiental que van más allá del simple discurso del 'lavado verde.'

Primero, mejoraron los salarios y en alguna medida también las condiciones laborales de sus trabajadores/as. Eso sí, esta concesión tuvo como contrapartida la generalización de un régimen laboral flexible y a destajo en lugar de por tiempo trabajado. Esto derivó en un aumento de la productividad laboral en las plantaciones, pero también en jornadas laborales más ocasionales, largas y demandantes. Segundo, como el poder y las rentas ya no están tan ligadas a la tierra como lo estaban para sus mayores, las y los ejecutivos de nueva ola están más abiertos/as a nuevas formas de control sobre la tierra. Así, aunque las compras de tierra sigan predominando, los complejos cañero y palmero introducen formas de control sobre la tierra sin propiedad directa, como la agricultura por contrato y los arrendamientos de tierras a largo plazo, incluso de tierras comunales. De este modo aumentan la superficie sembrada mientras contrarrestan acusaciones de acaparamiento de tierras. En tercer lugar, los agronegocios cañeros y palmeros están adoptando prácticas de la llamada 'agricultura climáticamente inteligente' y de 'intensificación sustentable', como el control biológico de plagas o la conservación de suelos. Así, además de reducir en alguna medida los impactos de sus negocios sobre la salud humana y el medio ambiente, las y los ejecutivos de nueva ola consiguen aumentar la productividad de las plantaciones y su resiliencia ante eventos climáticos extremos.

Por tanto, estas concesiones en el ámbito productivo privado ayudan a los agronegocios a proyectarse como empresas sociales verdes mientras aumentan su productividad, reducen costos, expanden operaciones y resuelven, al menos temporalmente, sus contradicciones con el trabajo asalariado, la naturaleza y la reproducción social. Es entonces practicando hasta cierto punto lo que predicaban que los complejos cañero y palmero pueden mantenerse a flote y a la vez

proyectarse públicamente como “defensores de la vida en el planeta” (Alonso-Fradejas 2021b).

De cara a este último fin es clave el papel que juegan diversos “custodios de la sustentabilidad.” Éstos son actores sociales y estatales que aprovechan el interés de los agronegocios de proyectarse como empresas sociales verdes para hacerles rendir cuentas en términos éticos, ambientales y sociales. De hecho, es cada vez más importante el rol de custodios de la sustentabilidad de carácter privado que juegan diversas ONG internacionales de desarrollo o conservación de la naturaleza. Estas organizaciones emplean herramientas de gobernanza de carácter voluntario y no vinculante, como los códigos de conducta y los sistemas de certificación empresarial, desarrolladas generalmente a través de iniciativas multiparte internacionales como la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y la Iniciativa de Sustentabilidad de la Caña de Azúcar (Bonsucro). Hoy día, la certificación por parte de estos custodios de la sustentabilidad es esencial para los agronegocios cañeros y palmeros que busquen hacer negocios con empresas transnacionales sujetas a escrutinio público como Coca Cola o Unilever. De hecho, estas herramientas de gobernanza privada tienen cada vez más influencia sobre la política pública, como lo refleja la prohibición de varios países europeos a la importación de aceite de palma que esté no certificada por la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (Alonso-Fradejas 2022).

La cuarta y última estrategia del populismo corporativo autoritario es la de “el lobo con piel de oveja.” Más allá de llenar los vacíos generados por las 3 estrategias previas orientadas a generar el consentimiento popular a las operaciones de los agronegocios, la amenaza y el uso de la violencia juegan un papel fundamental en la agenda populista corporativa autoritaria desde un inicio. Una cosa es la apertura de las y los ejecutivos de nueva ola a implementar reformas que reduzcan los impactos ambientales y sociales negativos de sus operaciones. Pero otra cosa muy distinta es que consientan a las demandas por un modelo de vida basado en la autodeterminación de los pueblos y la justicia social y ambiental que plantean sus detractores. Es precisamente para este grupo opositor, sin importar su nacionalidad o afiliación institucional, que está reservada la estrategia del lobo con piel de oveja (Alonso-Fradejas 2021b).

Esta estrategia autoritaria y violenta se despliega a través de dos tácticas fundamentales. Una es el llamado a defender el Estado de Derecho, y así justificar la movilización del aparato represivo del Estado para criminalizar y contener a las voces opositoras al modelo agroextractivo dominante (Alonso-Fradejas 2013). La otra es la táctica de “la ley de la selva,” en la que se recurre a violencia paraestatal para amenazar, agredir o eliminar de manera selectiva a opositoras y opositores estratégicos, especialmente a líderes y lideresas de las luchas en defensa del territorio, en un contexto social marcado por la violencia del narco y las maras.

IV. EL ‘AGROEXTRACTIVISMO VERDE’: ¿CAMBIANDO TODO PARA QUE NADA CAMBIE?

En Bolivia, Paraguay y Guatemala, las oligarquías nacionales mantienen un control fuerte, aun si no absoluto, sobre la economía y el Estado. Así, la expansión del modelo agroextractivo se viene desarrollando sobre relaciones oligárquicas de propiedad y control sobre la tierra, el trabajo y la naturaleza de larga data. El avance de los complejos corporativos de cultivos comodín controlados por la oligarquía y alimentados por el capital financiero internacional ha sustituido el latifundio improductivo del pasado por plantaciones altamente intensivas en capital. El poder de base agraria de las élites sigue reproduciéndose, ya sea en el caso de los “Barones del Este” en Santa Cruz, Bolivia, en el de los beneficiarios de las clientelares “tierras malhabidas” en la región oriental de Paraguay, o en el de la nueva generación de la oligarquía Guatemalteca que ha convertido los ingenios azucareros y molinos de aceite de palma de sus mayores en complejos transnacionales de cultivos comodín que afirman ser capaces de atajar las crisis medioambientales y sociales del momento. En Paraguay, en particular, la clase terrateniente fue una de las principales instigadoras del “juicio político exprés” y el “golpe parlamentario” que destituyó al presidente Lugo, y que buscaba así garantizar la continuidad del Estado oligárquico y el modelo de desarrollo agroextractivista al que servía (Ezquerro-Cañete y Fogel 2017).

En general, las alianzas entre actores estatales, elites y capital agroextractivo han debilitado el potencial transformador de varios gobiernos de izquierda para redistribuir la tierra y mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores. En Bolivia, la alianza entre el gobierno del MAS y la élite agroindustrial desde 2010 transformó las promesas de “revolución agraria” y soberanía alimentaria en políticas de “revolución productiva” y ampliación de frontera agrícola. Si bien esta alianza estratégica fue mutuamente beneficiosa para mantener el poder político y económico, también marcó el inicio de una ruptura entre el MAS y sus bases, presagiando la crisis política que estalló en 2019 (Webber 2017; McKay 2018b; McKay y Colque 2021). Del mismo modo, en Paraguay la promesa inicial de Lugo de llevar a cabo una reforma agraria redistributiva se vio limitada a una modesta agenda de reformas para consentir a la creciente resistencia de la poderosa alianza APS-ARP. Y en Guatemala la táctica populista corporativa autoritaria de la defensa del Estado de Derecho ha sido útil para desarticular cualquier intento redistributivo en las políticas de tierras y desarrollo rural aprobadas desde 2009.⁵ El caso de la política de tierras de 2014 es particularmente revelador. Cuando fue cuestionado por representantes del movimiento social acerca de las grandes diferencias entre los borradores iniciales y finales de la política de tierras, un subsecretario de asuntos agrarios explicó: “No es exactamente lo que pretendíamos, ¿va muchá? Pero como dice

⁵ Ver León Araya (2023) para una discusión elaborada sobre esta dinámica en el contexto de la expansión de la palma aceitera en Honduras.

el dicho, donde manda capitán no manda marinero” (citado en Alonso-Fradejas 2021b: 13).

Otros tipos de alianzas estratégicas adoptan la forma de iniciativas de gobernanza multiparte, como en el caso del programa de Productos Básicos Verdes del PNUD en Guatemala (cacao y palma de aceite) y Paraguay (carne de vacuno y soja). Este enfoque privilegia los mecanismos de gobernanza no vinculantes, ya sean de carácter público, como los Principios para la Inversión Agrícola Responsable del Banco Mundial de 2010, o desarrollados en iniciativas multiparte dirigidas por actores privados, como las Mesas Redondas sobre Aceite de Palma Sostenible y Soja Responsable. Más allá de su carácter no vinculante y voluntario, muchas de estas herramientas de gobernanza corporativa de “derecho blando” suelen estar plagadas de lagunas y, en última instancia, permiten ‘cambiar todo para que nada cambie’ con relación a la distribución de los beneficios y las cargas ambientales, económicas y simbólicas de la acción climática. En la práctica, las agencias estatales encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes medioambientales, laborales o de tierras reciben un apoyo mínimo, como se puso de manifiesto en Paraguay con la falta de apoyo prestado al SENAVE para llevar a cabo sus inspecciones en las explotaciones de soja, la medición de las barreras y la respuesta a las denuncias de fumigación de las escuelas rurales (Kretschmer, Areco y Palau 2020). Del mismo modo, el programa de biodiésel de Bolivia se ha utilizado en gran medida para justificar la expansión de la frontera agrícola, lo que ha provocado una deforestación generalizada y la invasión de los territorios de los pueblos indígenas en nombre de la ‘economía verde.’ Y en Guatemala, la responsabilidad de las empresas de caña y palma por la contaminación del medio ambiente se ve limitada porque las “Evaluaciones de Impacto Ambiental” son obligatorias para las plantas de procesamiento pero no para las plantaciones de caña y palma que no sustituyan uso de suelo agrícola (Alonso-Fradejas 2018).

Los agronegocios de cultivos comodín y sus aliados en el Estado y la sociedad civil han influenciado fuertemente el entorno normativo para favorecer un mayor extractivismo de recursos bajo el paraguas de la acción climática dominante a través de medios políticos más o menos directos. Entre ellos destaca la práctica tradicional de los grupos de presión, como lo refleja la capacidad de la UGP en Paraguay para impedir numerosas mociones presentadas para introducir un impuesto a la exportación sobre los cereales no procesados de tan sólo el 6% e impedir la aplicación de las leyes sobre pesticidas. Una forma más directa de influir en los resultados de la reglamentación en los tres países son los nombramientos de ‘puerta giratoria.’ Éstos conllevan el que personas vinculadas al agronegocio sean nombradas para ocupar puestos en el gobierno y posteriormente vuelvan a los agronegocios como parte de grupos de presión. En Bolivia se forjó una alianza mutuamente beneficiosa entre el gobierno del MAS y los agronegocios bajo control de los “Barones del Oriente” como medio para reproducir el poder político del primero y el poder económico de los segundos. Y como vimos, el populismo corporativo autoritario en Guatemala

se apoya fuertemente en el litigio legal en defensa del Estado de Derecho para convertir el interés de los propietarios de los complejos de la caña y de la palma en interés público.

Existen también diversos medios de influencia corporativa en el discurso dominante de la acción climática que justifican, legitiman y en última instancia alimentan la paradoja de un mayor extractivismo de recursos para salvar el planeta. En Guatemala, el agronegocio palmero se promueve como un medio altamente productivo y ambientalmente sostenible para alimentar el mundo, generar energía renovable y enfriar el planeta, al tiempo que promete empleo, crecimiento económico y “buena gobernanza” (Hunsberger y Alonso-Fradejas 2016). En Paraguay, el auge de la soja se presenta como el motor que ha impulsado al país en la escena mundial como una “potencia agroindustrial.” Según la UGP, “los cultivos modificados genéticamente permiten aumentar la producción de alimentos y, al mismo tiempo, reducir el uso de agroquímicos, preservando la tierra y el medio ambiente.” Estas afirmaciones gozan de escasa credibilidad si consideramos el aumento exponencial en el uso de plaguicidas y agroquímicos que acompaña la expansión sojera, y que la mayor parte de la importación y distribución se realiza al margen del mercado formal (Hetherington 2020). En Bolivia, tanto el Estado como las élites del agrocapital plantean la agricultura extractivista como un medio para lograr la “soberanía alimentaria” y la “soberanía energética” a través de la producción de biocombustibles, y el crecimiento inclusivo “a favor de los pobres,” a pesar de sus evidentes contradicciones (ANAPO 2014).

Finalmente, cabe destacar que la alianza entre capital agroextractivo, oligarquía y actores estatales también despliega nuevas estrategias políticas que combinan la generación de consentimiento popular al proyecto agroextractivo con la violencia y la represión selectiva de sus detractoras/es, tanto por parte del Estado bajo el pretexto de la defensa del Estado de Derecho, como por parte de actores privados. La agenda populista corporativa autoritaria de la nueva generación de ejecutivas/os tras los complejos de la caña y la palma en Guatemala es un claro ejemplo de este giro. Pero también lo son la contienda de ideas que como vimos alimenta la contradicción de colocar el extractivismo de recursos al centro de la acción climática y el bienestar social, y la represión de las y los detractores del nuevo orden agroextractivo en los tres países.

V. CONCLUSIÓN

Tanto las élites económicas como diversos gobiernos que van desde la izquierda progresista hasta la derecha conservadora siguen apostando por el modelo extractivista en América Latina, ahora paradójicamente con fines de crecimiento verde. El paradigma de la economía verde pretende ‘desacoplar’ el crecimiento económico del uso de recursos para enfriar el planeta a través de una mayor extracción de recursos. Sin embargo, el discurso del agroextractivismo verde

desplaza el foco de atención de esta paradoja y sus contradicciones ecológicas y sociales hacia las innovaciones técnico-administrativas necesarias para reproducir las condiciones naturales y sociales de producción de los complejos de cultivos comodín como la caña, la soja y la palma. Este giro ecomodernista en la agenda política del poder se asienta sobre una larga historia de extractivismo y dependencia facilitada por la alianza entre capital (trans)nacional, actores estatales y élites nacionales. Esta triple alianza histórica sigue contando con el poder para controlar tanto la dirección de las políticas dominantes en materia de acción climática y bienestar social, como los fondos, los imaginarios sociales y los conocimientos que las hacen posible. Sin embargo, esta triple alianza no sólo persigue sus fines influenciando marcos normativos y discursos legitimadores. Como planteamos en este análisis de la agenda política del ‘agroextractivismo verde,’ hoy en día las elites económicas y políticas de la región también recurren a nuevas estrategias políticas que combinan la generación de consentimiento popular al proyecto agroextractivo con violencia y represión selectiva y amparada en la defensa del Estado de Derecho.

Agradecimientos

Los autores agradecen a las/los tres revisores anónimos por sus comentarios y sugerencias. Cualquier error u omisión en el texto es de nuestra responsabilidad exclusiva.

REFERENCIAS

- Almaraz, A. 2014. “Las Luchas Indígenas y Campesinas en los Dos Ciclos de la Reforma Agraria.” En *Recientes Transformaciones Agrarias en Bolivia: Memoria*, editado por Fundación TIERRA. La Paz: Fundación TIERRA, 49–57.
- Alonso-Fradejas, A. y S. Gauster. 2006. *Perspectivas para la agricultura familiar campesina de Guatemala en un contexto DR-CAFTA*. IDEAR, ASC & IDRC/CRDI.
- Alonso-Fradejas, A., F. Alonzo y J. Dürr. 2008. *Caña de azúcar y Palma Africana: Combustibles para un Nuevo Ciclo de Acumulación y Dominio en Guatemala*. Guatemala: IDEAR.
- Alonso-Fradejas, A. 2013. “‘Sons and Daughters of the Earth’: Indigenous Communities and Land Grabs in Guatemala.” *Land & Sovereignty in the Americas Series, Issue Brief 1*. Oakland: Food First.
- Alonso-Fradejas, A. 2018. *The Rise of Agro-Extractive Capitalism: Insights from Guatemala in the Early 21st Century*. The Hague: International Institute of Social Studies.
- Alonso-Fradejas, A. 2021. “The Resource Property Question in Climate Stewardship and Sustainability Transitions.” *Land Use Policy* 108: 1-10.
- Alonso-Fradejas, A. 2021b. “The Rise of Authoritarian Corporate Populism.” *Latin American Perspectives* (por publicar).
- Alonso-Fradejas, A. 2022. “La purga agroextractivista en Guatemala. ¿Hacia un futuro renovable pero insufrible?” En *Extractivismo Agrario en América Latina*, editado por B. McKay, A. Alonso-Fradejas y A. Ezquerro-Cañete. Buenos Aires: CLACSO, 259-304.
- ANAPO. 2014. “Soya Permite Lograr la Soberanía Alimentaria del País.” *ANAPO Noticias* 105.

- Banco Mundial. 2007. *World Development Report 2008: Agriculture for Development*. Washington: World Bank.
- Banco Mundial. 2015. *Future of food: Shaping a climate-smart global food system*. Washington: World Bank.
- Berman-Arévalo, E. y D. Ojeda. 2020. "Ordinary Geographies: Care, Violence, and Agrarian Extractivism in 'Post-Conflict' Colombia." *Antipode* 52(6): 1583-1602.
- Bran-Guzmán, E. 2017. "Conflictividad socioambiental en Centroamérica. Una década de rearticulación y movilización social y política." *Argumentos* 30(83): 43-68.
- Carter, M.R., B.L. Barham y D. Mesbah. 1996. "Agricultural Export Booms and the Rural Poor in Chile, Guatemala, and Paraguay." *Latin American Research Review* 31(1): 33-65.
- Colque, G., E. Tinta y E. Sanjinés. 2016. *Segunda Reforma Agraria: Una Historia que Incomoda*. La Paz: TIERRA.
- CODEHUPY. 2012. *Informe de Derechos Humanos Sobre el Caso Marina Kue*. Asunción: Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay.
- ECLAC. 2021a. *Economic Survey of Latin America and the Caribbean, 2021*. Santiago: ECLAC.
- ECLAC. 2021b. Forest loss in Latin America and the Caribbean from 1990 to 2020: the statistical evidence. ECLAC Statistical Briefings 2.
- Ezquerro-Cañete, A. 2016. "Poisoned, Dispossessed and Excluded: A Critique of the Neoliberal Soy Regime in Paraguay." *Journal of Agrarian Change* 16(4): 702-710.
- Ezquerro-Cañete, A. 2017. "Paraguay: Class Struggle on the Extractive Frontier." En *The Class Struggle in Latin America*, editado por J. Petras y H. Veltmeyer. London: Routledge, 182-206.
- Ezquerro-Cañete, A. 2019. "Deadly Soy: The Violent Expansion of Paraguay's Agro-Extractive Frontier." En *Organized Violence: Capitalist Warfare in Latin America*, editado por D. Paley y S. Granovsky-Larsen. Regina: University of Regina Press 78-95.
- Ezquerro-Cañete, A. y R. Fogel. 2017. "A Coup Foretold: Fernando Lugo and the Lost Promise of Agrarian Reform in Paraguay." *Journal of Agrarian Change* 17(2): 279-295.
- Ezquerro-Cañete, A. y H. Veltmeyer. 2023 "Agroextractivismo: La Nueva Cara del Imperialismo en el Sector Agrícola de América Latina." *Novapolis* 21: 93-113.
- FAO. 2018. *Panorama de la pobreza rural en América Latina y el Caribe 2018*. Santiago: FAO.
- Fogel, R. y M. Riquelme. 2005. *Enclave Sojero: Merma de Soberanía y Pobreza*. Asunción: Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios.
- Fogel, R., S. Costa y S. Valdez. 2018. *Forjando privilegios: Discursos, estrategias y prácticas del empresariado del agronegocio para la incidencia en la política tributaria paraguaya*. Buenos Aires: CLACSO.
- Gago, V. y S. Mezzadra. 2015. "Para una Crítica de las Operaciones Extractivas del Capital: Patrón de Acumulación y Luchas Sociales en el Tiempo de la Financiarización." *Nueva Sociedad* 255: 38-52.
- Gras, C. y V. Hernández. 2014. "Agribusiness and Large-Scale Farming: Capitalist Globalisation in Argentine Agriculture." *Canadian Journal of Development Studies* 35(3): 339-357.
- Gudynas, E. 2010. "Agropecuaria y Nuevo Extractivismo Bajo los Gobiernos Progresistas de América del Sur." *Territorios* 5: 37-54.
- Gudynas, E. 2020. *Extractivisms: Politics, Economy and Ecology*. Halifax: Fernwood Publishing.
- Guereña, A. 2016. *Unearthed: Land, Power and Inequality in Latin America*. Oxford: Oxfam.
- Guereña, A. y L. Rojas. 2016. *Yvy Jára: Los Dueños de la Tierra en Paraguay*. Asunción: Oxfam.
- Hetherington, K. 2020. *The Government of Beans: Regulating Life in the Age of Monocrops*. Durham: Duke University Press.
- Hunsberger, C., y A. Alonso-Fradejas. 2016. "The Discursive Flexibility of 'Flex Crops': Comparing Oil Palm and Jatropha." *Journal of Peasant Studies* 43(1): 225-250.
- Kay, C., y M. Urioste. 2007. "Bolivia's Unfinished Agrarian Reform: Rural Poverty and Development Policies." En *Land, Poverty and Livelihoods in the Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries*, editado por H. Akram-Lodhi, S.M. Borras y C. Kay. London: Routledge, 41-79.

- Kretschmer, R., A. Areco y M. Palau. 2020. *Escuelas Rurales Fumigadas en Paraguay*. Asunción: Base Investigaciones Sociales.
- Leguizamón, A. 2019. "The Gendered Dimensions of Resource Extractivism in Argentina's Soy Boom." *Latin American Perspectives* 46(2): 199-216.
- León Araya, A. 2023. *The Coup and the Palm Trees: Agrarian Conflict and Political Power in Honduras*. Athens: University of Georgia Press.
- McKay, B.M. 2017. "Agrarian Extractivism in Bolivia." *World Development* 97: 199-211.
- McKay, B.M. 2018a. "The Politics of Convergence in Bolivia: Social Movements and the State." *Third World Quarterly* 39(7): 1247-1269.
- McKay, B.M. 2018b. "The Politics of Agrarian Change in Bolivia's Soy Complex." *Journal of Agrarian Change* 18(2): 406-424.
- McKay, B.M. y G. Colque. 2021. "Populism and its Authoritarian Tendencies: The Politics of Division in Bolivia." *Latin American Perspectives* (por publicar).
- McKay, B.M., A. Alonso-Fradejas y A. Ezquerro-Cañete. 2022. *Extractivismo Agrario en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Ojeda, D., J.S. Sasser y E. Lunstrum. 2020. "Malthus's Specter and the Anthropocene." *Gender, Place & Culture* 27(3): 316-332.
- Otero, G. y P. Lapegna. 2016. "Transgenic Crops in Latin America: Expropriation, Negative Value and the State." *Journal of Agrarian Change* 16(4): 665-674.
- Palau, T., D. Cabello, A. Maeyens, J. Rulli y D. Segovia. 2007. *Los Refugiados del Modelo Agroexportador. Impactos del Monocultivo de Soja en las Comunidades Campesinas Paraguayas*. Asunción: BASE Investigaciones Sociales.
- Petras, J. y H. Veltmeyer. 2014. "Agro-Extractivism: The Agrarian Question of the 21st Century." En *Extractive Imperialism in the Americas: Capitalism's New Frontier*, editado por J. Petras y H. Veltmeyer. Leiden: Brill, 62-100.
- PNUD. 2016. *Six Years of Innovation and Impact (2009–2015)*. New York: UNDP.
- PNUD. 2021. *Palm Oil, Pineapples and Partnerships: Impact and Lessons from a Decade of Transforming Agricultural Commodities*. New York: UNDP.
- Poulantzas, N. 1978. *State, Power, Socialism*. London: Verso.
- Riquelme, Q. y E. Vera. 2013. *La Otra Cara de la Soja: El Impacto del Agronegocio en la Agricultura Familiar y la Producción de Alimentos*. Asunción: Proyecto Acción Ciudadana contra el Hambre y por el Derecho a la Alimentación.
- Rulli, J. 2007. *United Soya Republics: The Truth About Soya Production in South America*. Buenos Aires: Grupo de Reflexión Rural.
- Soruco, X., W. Plata y G. Medeiros. 2008. *Los Barones del Oriente: El Poder en Santa Cruz Ayer y Hoy*. La Paz: Fundación TIERRA.
- Sauer, S. y K.R. Oliveira. 2022. "Extractivismo agrario en el Cerrado brasileño." En *Extractivismo Agrario en América Latina*, editado por B.M. McKay, A. Alonso-Fradejas y A. Ezquerro-Cañete. Buenos Aires: CLACSO, 125-162.
- Svampa, M. 2019. *Development in Latin America: Toward a New Future*. Halifax: Fernwood Publishing.
- Teubal, M. 2009. "Peasant Struggles for Land and Agrarian Reform in Latin America." En *Peasants and Globalization: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*, editado por H. Akram-Lodhi y C. Kay. London: Routledge, 148-166.
- Ultima Hora. 2012. "Los Agroempresarios Apoyan Proceso de Destitución del Presidente Lugo." *Ultima Hora*, Junio 22.
- UNDROP. 2018. "United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas A/RES/73/165." Recuperado el 10 de junio de 2023 de https://digitallibrary.un.org/record/1661560/files/A_RES_73_165-EN.pdf.
- Urioste, M. 2011. *Concentraci3n y Extranjerizaci3n de la Tierra en Bolivia*. La Paz: Fundaci3n TIERRA.
- Urioste, M. 2012. "Concentration and 'Foreignisation' of Land in Bolivia." *Canadian Journal of Development Studies*, 33(4): 439-457.

- Veltmeyer, H. and A. Ezquerro-Cañete. 2023a. *From Extractivism to Sustainability: Scenarios and Lessons from Latin America*. London: Routledge
- Veltmeyer, H. y A. Ezquerro-Cañete. 2023b. "Agro-Extractivism." *Journal of Peasant Studies* 50 (5): 1673-1686.
- Vergara-Camus, L. y C. Kay. 2017. "Agribusiness, Peasants, Left-Wing Governments, and the State in Latin America: An Overview and Theoretical Reflections." *Journal of Agrarian Change* 17(2): 239-257.
- Webber, J.R. 2017. "Evo Morales, Transformismo, and the Consolidation of Agrarian Capitalism in Bolivia." *Journal of Agrarian Change* 17(2): 330-347.
- Weis, T. 2010. "The Accelerating Biophysical Contradictions of Industrial Capitalist Agriculture." *Journal of Agrarian Change* 10(3): 315-341.
- Wesz, V.D. 2022. "Soybean Production in Paraguay: Agribusiness, Economic Change and Agrarian Transformations." *Journal of Agrarian Change* 22(2): 317-340.
- Wolford, W., S.M. Borras, R. Hall, I. Scoones y B. White. 2013. "Governing Global Land Deals: The Role of the State in the Rush for Land." *Development and Change* 44(2): 189-210.
- Ye, J., J.D. van der Ploeg, S. Schneider y T. Shanin. 2020. "The Incursions of Extractivism: Moving from Dispersed Places to Global Capitalism." *Journal of Peasant Studies* 47(1): 155-183.

Recibido: 11 de noviembre del 2022.

Aceptado: 14 de octubre del 2023.

Alberto Alonso-Fradejas es Profesor de Sociología Rural en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Alberto es parte del equipo editorial del *Journal of Peasant Studies* (JPS), e investigador asociado al Transnational Institute (TNI) en Ámsterdam y al Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de Guatemala (IDEAR). Su investigación aborda las cuestiones del trabajo, la reproducción social y el control sobre la tierra y otros bienes naturales, así como las dinámicas políticas que las determinan, en la acción climática y las transiciones hacia la agricultura sostenible. Correo electrónico: alberto.alonso-fradejas@wur.nl

Arturo Ezquerro-Cañete es Profesor Asistente de Ciencias Políticas en la Universidad de New Brunswick en Canadá. Fue Research Fellow con el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS) en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es Coordinador de la Red Marítima-Guatemala Rompiendo el Silencio (BTS/RES). Sus publicaciones más recientes incluyen: *From Extractivism to Sustainability* (Routledge, 2023), *Extractivismo Agrario en América Latina* (CLACSO 2022), y *Agrarian Extractivism in Latin American* (Routledge, 2021). Correo electrónico: arturo.ezquerro-canete@unb.ca

Ben M. McKay es Profesor Asociado de Desarrollo y Sostenibilidad en la Universidad de Calgary en Canadá. Su investigación se centra en la economía y la ecología política de las transformaciones agrarias en América Latina, incluyendo el extractivismo agrario y alternativas como la soberanía alimentaria y la agroecología. Correo electrónico: ben.mckay@ucalgary.ca

